



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**Sala Mixta de Decisión**

**MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MONTOYA ECHEVERRI**

**Conflicto de competencia- Proceso ejecutivo por obligación de hacer  
(suscribir documento)**

**Radicado: 05 001 22 00 000 2021 00085 01 (2021-083)**

**Auto interlocutorio Nro. 478 de 2021**

Medellín, catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

Discutido y aprobado mediante acta 196 del 14 de diciembre de 2021.

Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo y Trece de Familia de Oralidad y Séptimo Civil del Circuito de Oralidad, todos de esta localidad, por causa de la demanda presentada por Luís Javier Montoya Jaramillo para iniciar el proceso ejecutivo de obligación de hacer (suscribir documento) en contra de la señora Catalina Vélez Echeverri.

**I. ANTECEDENTES**

Al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de esta ciudad, le correspondió por reparto la demanda<sup>1</sup> aludida, en la que el señor Luís Javier Montoya Jaramillo pidió que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la señora Catalina Vélez Echeverri, para que dentro del término de 3 días contados a partir de la notificación del respectivo auto, acuda a la Notaría Veinte del Círculo de Medellín y suscriba la escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal que conformó con él en virtud del matrimonio que contrajeron, la que fue disuelta por la sentencia Nro. 178 del 5 de diciembre de 2017 y complementada por providencia Nro. 522 del 9 de noviembre de 2018 del Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de la misma localidad, que contiene el

---

<sup>1</sup> Ver archivo denominado "06. Demanda Y Anexos".

pacto consignado en el Acta de Conciliación Nro. 1896 del 28 de noviembre de 2016 del Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad de Medellín.

Narró el ejecutante como fundamento de lo anterior que, en virtud del acuerdo aludido, iniciaron el trámite respectivo para la liquidación de la sociedad conyugal ante el Notario mencionado, pero la señora Vélez Echeverri, a *motu proprio* retiró los documentos y presentó la demanda para iniciar el proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico en su contra, que le correspondió al Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de esta urbe y le asignó el radicado 2017-00216. El proceso terminó por conciliación que se aprobó por sentencia Nro. 178 del 5 de diciembre de 2017, complementada por decisión Nro. 522 del 9 de noviembre de 2018, a la que se hizo referencia.

Ante el mismo despacho la señora Catalina Vélez Echeverri presentó demanda de liquidación de la sociedad conyugal y desde su contestación ha puesto de presente el acta de conciliación mediante la cual las partes de manera expresa acordaron la forma en cómo se procedería a liquidar la sociedad conyugal, pero la respuesta que ha obtenido del juzgado en manifestaciones surtidas en algunas audiencias, es que ese proceso no es el escenario procesal para determinar el cumplimiento de esa acta, por lo que debe solicitar su debido cumplimiento por medio de otro proceso judicial.

Fue así como el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de esta municipalidad, en proveído que emitió el 1° de julio anterior<sup>2</sup>, rechazó la demanda y ordenó su remisión ante su homólogo Séptimo para que asumiera su conocimiento, con apoyo en que como la pretensión principal se encuentra sujeta a una providencia judicial que emitió éste despacho, concretamente la que decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso celebrado entre las partes y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, última que es la que se pretende ejecutar, acorde con el artículo 306 del Código General del Proceso, no es competente para conocer del asunto.

Por su parte, el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, a quien se le remitió el asunto, rechazó la demanda<sup>3</sup> y ordenó su remisión a la Oficina Judicial de la misma urbe para que fuera repartida entre los juzgados civiles del circuito de

---

<sup>2</sup> Ver archivo "02 AutoJuzFam".

<sup>3</sup> Ver auto del 9 de julio de 2021, archivo "03.AutoRechazaDemandaJuzFam".

oralidad de la localidad, apuntalado en que, al revisar la demanda, encontró que lo pretendido es la ejecución de la obligación de suscribir una escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal, como una obligación contenida en el acta de conciliación celebrada entre las partes el 28 de noviembre de 2016 ante el Centro de Conciliación de la Universidad de Medellín y los artículos 21 y 22 del Código General del Proceso no le otorgan a los jueces de familia competencia para esa ejecución.

Por lo demás, si bien el numeral 3º del artículo 22 del mismo estatuto asigna la competencia a los jueces de familia para conocer *“de la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges”*, lo cierto es que lo pretendido no radica en la liquidación de la sociedad conyugal surtida entre las partes (trámite de naturaleza liquidataria, no de ejecución), sino en el cumplimiento de la obligación de suscribir una escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, en los términos acordados por las partes en el acta en mención, por lo que resulta necesario dejar claro que aunque dictó la sentencia que dio fin al proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso contraído por las partes, en la que se dispuso la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre las partes, en ella también se dijo que esa liquidación sería por el trámite judicial o notarial, como a bien lo tuvieran los interesados, más no se hizo alusión al acuerdo celebrado ante el Centro de Conciliación aludido, por lo que no era viable predicar un factor de conexidad, como para atribuirle la competencia para conocer del asunto.

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito, a quien le correspondió por reparto el asunto, el 25 de agosto de 2021<sup>4</sup>, se abstuvo de librar el mandamiento ejecutivo, al considerar que el documento presentado como base de la ejecución, no contenía una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la demandada y a favor del demandante, respecto de la liquidación de la sociedad conyugal. En virtud del recurso de reposición presentado por el interesado, el auto se repuso porque del acuerdo allegado como base de ejecución, en la cláusula 3.3. se desprendía una obligación con las características anteriormente señaladas, ante lo cual el

---

<sup>4</sup> Ver archivo denominado “09SeAbstieneDeLibrarMandamientoEjecutivo”.

<sup>5</sup> Ver archivo nombrado como “12Repone”.

ejecutante allegó un escrito con el que pretendió subsanar las falencias que se le señalaron a la demanda.

No obstante, por auto del 5 de octubre del año que transcurre<sup>6</sup>, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la localidad dispuso: “**NO ASUMIR** el conocimiento de la presente demanda ejecutiva de obligación de suscribir escritura pública **de Liquidación de Sociedad Conyugal.**” y “**PROPONER** conflicto negativo de competencia con el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín y/o Trece de Familia de Oralidad de Medellín...” (negrillas en el texto), al considerar que carecía de competencia por la materia, porque se trata de un asunto vinculado exclusivamente a un tema familiar, que no es otro que la liquidación de la sociedad conyugal, para lo cual el legislador diseñó unas reglas de competencia distintas, sin que se pueda considerar que por el solo hecho de pretender la ejecución de una obligación de hacer, sin reparar en el objeto de lo que se ejecuta, tenga la competencia para conocer de él, pues de admitirlo, se desconocería que naturalmente se deben aplicar las normas propias del mismo, observar su procedencia y el alcance, todo lo cual, debe ser instruido por el juez especializado en la materia.

En virtud de lo anterior, dispuso la remisión del expediente al Tribunal para que en Sala Mixta se dirima el conflicto que suscitó.

## II. CONSIDERACIONES

De entrada, debe decirse que como quiera que el conflicto planteado involucra a varios juzgados de diferente especialidad de un mismo distrito judicial, esta Sala es competente para dirimirlo, al tenor del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.

La competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre los distintos jueces y se determina a través de diversos factores como el objetivo, que a su vez se subdivide por la materia y la cuantía; el subjetivo, el territorial y el funcional, aunque algunos agregan el factor conexión, que otros prefieren tener como un elemento del desplazamiento de la competencia.

---

<sup>6</sup> Ver archivo llamado “15ConflictoCompetencia202100262”.

Para determinar si el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de esta ciudad, a quien le fue repartida inicialmente la demanda a que se ha venido haciendo alusión, es el competente para conocer de ella, si por el contrario lo es el Juzgado Séptimo de la misma especialidad y municipio, a quien le fue enviada por aquél, por haber conocido del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso contraído por las partes o si lo es el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la misma localidad, a quien se le repartió en último término, porque lo pretendido es la ejecución de una obligación de suscribir una escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, contenida en el acta de conciliación celebrada entre las partes el 28 de noviembre de 2016 ante el Centro de Conciliación de la Universidad de Medellín, se debe tener en cuenta que:

El Código General del Proceso en sus artículos 21 y 22 se encargó de señalar los procesos que deben conocer los jueces de familia en única y primera instancia, respectivamente y al revisarlos, particularmente el último, se avista que si bien es cierto que en su numeral 3° dispone que conocerán de la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges, o cuando la disolución haya sido declarada ante notario, o por juez diferente al de familia, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios, no lo es menos, que en ninguno de sus numerales contiene los procesos ejecutivos por obligación de hacer -por obligación de suscribir documento- a que alude el artículo 434 del Código General del Proceso, que se comprenden entre los contenciosos que por su cuantía conocen los jueces civiles municipales o del circuito, acorde con los numerales 1° de los artículos 17, 18 y 20 del Estatuto Procesal General, sin que para desatar este caso tenga incidencia el que el último artículo citado en su ordinal 6° preceptúe que los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los asuntos atribuidos a los jueces de familia en primera instancia, cuando en el circuito no exista juez de familia o promiscuo de familia, en la medida que, como se acaba de decir, no existe norma que asigne la competencia para conocer del asunto a los jueces de familia.

Es que no puede decirse, como lo pretende, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, que por procurarse la ejecución de suscribir un documento (escritura pública) sobre un asunto de familia, concretamente sobre la forma en que acordaron las partes ante un centro de conciliación que se liquidaría la sociedad conyugal que

se formó entre ellos por virtud del matrimonio que contrajeron, la competencia para el efecto esté radicada en los jueces de esta jurisdicción y mucho menos se pueda pensar que por estarse tramitando ante un Juzgado de Familia un proceso con ese cometido se tenga que conocer del ejecutivo que ahora se pretende adelantar, independientemente de la incidencia que esta circunstancia tenga para ese proceso, si en cuenta se tiene que las competencias son regladas y, como viene de verse, ninguna norma atribuye a los jueces de familia el conocimiento de este asunto. Tampoco puede pensarse que se deba dar aplicación al artículo 306 del mismo estatuto, por cuanto se trata de ejecución de sentencias que condenen al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer y, como se anotó en precedencia, lo que acá se persigue es el cumplimiento de un acuerdo conciliatorio que presta mérito ejecutivo, diferente al trámite verbal para obtener la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico o el liquidatorio de la sociedad de gananciales.

Por lo demás, no puede perderse de vista que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esta localidad, desde que le fue repartido el asunto para su conocimiento, admitió que era competente para conocer de él, esto es, que ningún reparo encontró para ello y fue sólo después de que inadmitiera el libelo genitor y el ejecutante allegara el memorial con el que pretendió subsanar las falencias que se le señalaron, que decidió suscitar el conflicto negativo de competencia con un argumento que, valga decirlo, ningún soporte jurídico tiene, pues se trata de uno con talente subjetivo, habida cuenta que no puede generalizarse que todo asunto de familia que se deba someter a la jurisdicción, atañe a los jueces de familia porque, el mismo Código General del Proceso se encargó de delinear qué asuntos conoce cada especialidad civil o de familia.

En este estado de cosas se declarará que le corresponde conocer del proceso ejecutivo de obligación de suscribir un documento que presentó el señor Luís Javier Montoya Jaramillo en contra de la señora Catalina Vélez Echeverri, al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de esta urbe, por lo que se ordenará remitir el expediente a dicho Juzgado para que asuma su conocimiento. A los Juzgados Séptimo y Trece de Familia de la misma localidad se les comunicará lo aquí decidido.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Mixta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.-** Dirimir el conflicto negativo de competencia presentado entre los **Juzgados Séptimo y Trece de Familia de Oralidad y Séptimo Civil del Circuito de Oralidad, todos de esta localidad**, en el sentido de **disponer** que el **Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín** es la autoridad competente para conocer del proceso ejecutivo de obligación de suscribir que presentó el señor **Luís Javier Montoya Jaramillo** en contra de la señora **Catalina Vélez Echeverri**, de acuerdo a las motivaciones de la presente providencia.

**SEGUNDO.-** Remítase el expediente al **Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín** para que asuma su conocimiento y le imprima el trámite dispuesto en la ley procesal.

**TERCERO.-** Comunicar esta decisión a los **Juzgados Séptimo y Trece de Familia de Oralidad de Medellín**, acompañando copia del presente proveído.

### **NOTIFÍQUESE**



**GLORIA MONTOYA ECHEVERRI**

**Magistrada**



**RICARDO DE LA PAVA MARULANDA**

**Magistrado**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

**Magistrada**

**Firmado Por:**

**Gloria Montoya Echeverri**

**Magistrado**

**Sala 001 De Familia**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**730304bc0f93d1bf794dcd60502771d72c941c8f3f486762b6564aa935443182**

Documento generado en 14/12/2021 10:34:23 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**